



GARIFUNAGU ÁGÜDAHEI HAMUA

GARÍFUNAS EN
DEFENSA DE SUS
TERRITORIOS



ÁGÜDAHATIÑA
MUA UGUCHURU

POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO GARÍFUNA

GARIFUNAGU ÁGÜDAHEI HAMUA

GARÍFUNAS EN
DEFENSA DE SUS
TERRITORIOS



ÁGÜDAHATIÑA
MUA UGUCHURU

POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO GARÍFUNA





Una mujer garífuna en Vallecito, Colón, transita por el territorio comunitario. Hace unos años estas tierras fueron parcialmente acaparadas por consorcios agroexportadores para cultivar palma africana y por grupos supuestamente ligados al narcotráfico, que instalaron una pista clandestina de aterrizaje. Justamente por la vía donde ella camina, descendían semanalmente avionetas procedentes de Sudamérica. Después de recibir múltiples amenazas, los garífunas de esta comunidad recuperaron sus tierras.

“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de las organizaciones que conforman la campaña Defensoras de la Madre Tierra, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea”

Investigación y redacción: Ariel Torres Funes

Fotografías: Dany Barrientos

Diseño y diagramación: Bricelda Contreras Torres

Esta publicación puede ser utilizada libremente para la incidencia política y campañas así como el ámbito de la educación y de la investigación siempre y cuando se indique la fuente de forma completa.

Octubre, 2016.

PRESENCIA GARÍFUNA EN HONDURAS



Este reportaje documenta el conflicto territorial de las comunidades de Vallecito y Nueva Armenia, situadas en los departamentos de Colón y Atlántida, respectivamente. Se exponen relatos de la defensa de sus tierras, de mujeres y hombres con la esperanza de recuperar lo invadido por terceros, razón por la cual enfrentan amenazas, acoso, persecuciones, secuestros, ataques físicos, intimidaciones y judicializaciones.

Carmen Álvarez es la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en el área de Salud, en la rama de medicinas tradicionales, para atender a los pobladores de las 48 comunidades garífunas. Originaria de Trujillo, Colón, Carmen es una de las lideresas que luchan por la defensa del territorio ancestral, por lo que enfrenta diversas amenazas por parte de los grupos invasores y judicializaciones desde el Estado.



Introducción

Breve historia de los garífunas

La emigración, los desplazamientos forzados, los procesos de liberación, pero, sobre todo, la defensa del territorio y el acceso a la tierra como derecho fundamental de vida, marcaron el origen de los garífunas.

Su historia se remonta a 1655 cuando dos buques españoles que transportaban esclavos desde África, naufragaron frente a las costas de Barbados y San Vicente, islas caribeñas que eran disputadas entre Francia y Gran Bretaña.

Documentos británicos mencionan otro naufragio ocurrido en 1675.

En su nuevo entorno, los náufragos trabajaron junto a los caribes insulares (uno de los primeros pueblos americanos que conocieron los europeos), con quienes convivieron y dieron origen a un nuevo mestizaje: el garífuna, también llamado karaphuna y garinagü.

En 1750 su demografía había crecido considerablemente. Los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca e intercambiaban tabaco por las armas que utilizarían para sus propósitos de emancipación. Por su parte, las mujeres realizaban las labores domésticas y la mayor parte del trabajo agrícola, básicamente el cultivo de algodón.



Un niño garífuna de Vallecito, al norte de Honduras, traslada agua desde la pila hacia la cocina comunitaria, donde preparan los alimentos para todos los pobladores. Su pierna derecha sufrió una herida con un machete, al colaborar en la producción agrícola. El saneamiento lo realizan con medicinas tradicionales. Al fondo se observa el templo ceremonial construido por esta comunidad.

Pobladora garífuna trabaja a tempranas horas de la mañana en el huerto comunitario de Vallecito, Colón. Sus alimentos provienen en su totalidad de las cosechas. Estos pobladores son garífunas de distintas regiones de la Costa Norte hondureña, garífunas que no tenían acceso a tierras, por lo que emigraron a esta comunidad colindante con el departamento de Gracias a Dios.



Con la llegada de cuantiosos grupos de colonos franceses y británicos, inició una cruenta disputa por la tierra de San Vicente. Los 345 kms² del territorio resultaron insuficientes para los intereses y las necesidades de los pobladores apiñados en la isla, tanto que los ingleses emplearon artimañas para que los garífunas cedieran sus terrenos fértiles. Intentaron la persuasión, el ardid, la compra y, por último, iniciaron una guerra, la cual franceses, caribes y garífunas, enfrentaron 19 meses de batallas para intentar librarse de su enemigo común¹.

Mediante una mayor fuerza militar, en 1775 los británicos se apropiaron de la isla y quemaron las casas y medios de vida de los garífunas, expulsados en 1797 de San Vicente. Conducidos en un convoy naval hacia la isla de Roatán y posteriormente, al puerto de Trujillo, ese año 5,080 personas arribaron a tierra firme.

Con la ayuda de los españoles, los ingleses llevaron a los garífunas a Honduras. Con ellos, los ibéricos situados en la Costa Norte, adquirieron una fuerza de trabajo adicional. Los hombres trabajaron como soldados y pescadores, y las mujeres en la siembra y cosecha de alimentos. De este modo proporcionaron la alimentación para la población europea, enferma de inanición debido a que no sabía producir en el trópico, ya que sus cultivos tradicionales no se adaptaban en los suelos ácidos de la región.

Tras estas vicisitudes históricas, por más de 300 años los garífunas desarrollan su cultura, en respuesta a las necesidades y a través del contacto con otras poblaciones. Con el respeto y fomento de lo ancestral, mantienen sus

tradiciones caribes, africanas y coloniales, origen de un sistema de subsistencia y una cosmovisión, marcada por la expulsión, búsqueda y defensa de los territorios.

Los garífunas, o, más correctamente denominados como garinagüs, actualmente habitan en 48 comunidades, desde Masca, departamento de Cortés, hasta Plaplaya, departamento de Gracias a Dios. También se ubican en seis centros urbanos de Belice, en dos comunidades de Nicaragua y en una de Guatemala. Se estima que hay unos 250 mil garífunas en Honduras y más de 100 mil que emigraron hacia Estados Unidos.

Reseña del conflicto territorial

En tierra firme los garífunas trabajaron como agricultores para los españoles instalados en la Costa Norte de Honduras, quienes les privaron el acceso directo a este recurso básico de producción.

Posteriormente los trasladaron a Trujillo, como estrategia de los colonos ibéricos para repoblar esa ciudad, incendiada por los ingleses en represalia al asentamiento de otros grupos; y para frenar las incursiones de los misquitos y británicos establecidos en el Río Sico.

En el siglo XIX los garífunas se expandieron en las costas hondureñas, al ocupar -con el beneplácito de la Corona de España y luego de los gobiernos republicanos- lo que ellos llamaron la «terra nullius» (tierra de nadie), zonas colindantes a las desembocaduras de los ríos, en su mayoría, territorios deshabitados por los indígenas pech, replegados ante la presión de los pobladores misquitos,

quienes ejercían el esclavismo con otros pueblos del litoral caribeño. Ahí se dedicaron a la pesca, a la caza y a la agricultura de subsistencia.

Después de casi un siglo de vivir en la Costa Norte, en 1885 recibieron el primer reconocimiento jurídico, con las titulaciones de las tierras de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, consideradas ejidos municipales. El título fue comunitario, acorde a las costumbres del grupo étnico.

En 1889 extendieron el título de Punta Castilla a favor de las comunidades de Cristales y Río Negro; en 1915, Iriona y Travesía; en 1921, Limón y Santa Rosa de Aguán; en 1922, Punta Piedras y Cusuna; en 1936 los garífunas recibieron los papeles legales para los territorios de Sangrelaya, Tocamacho y los ejidos de Bacalar; y en 1950, la acreditación de Triunfo de la Cruz.

Para la primera asociación de base de los pueblos indígenas de Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), 1885 no solo representa el primer año de las titulaciones, sino también el inicio de un largo y tortuoso proceso por la defensa del territorio².

De las bananeras al narcotráfico

Con las compañías bananeras en la Costa Norte de Honduras a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los garífunas trabajaron la siembra de la fruta y las actividades de embarque. Víctimas de las políticas concesionistas, perdieron muchos de sus territorios a manos de los consorcios extranjeros, quienes recibieron del Estado grandes extensiones de tierra a cambio de cada kilómetro que construyeran del sistema ferroviario, sin importar que los predios tuviesen dueños o se finalizara el proyecto de transporte.

El ministro norteamericano en Honduras, John D. Ewin, comentó en 1915, que las empresas «nunca se propusieron cumplir con esto desde el principio. Ellos usaron esas líneas ferroviarias para sus propósitos particulares, en el transporte de la fruta y de sus plantaciones a los puertos».

Ewin agregó que el gobierno hondureño estaba consciente de su impotencia frente a las grandes compañías, listas a emplear todos

los medios, comprendida la corrupción y el exterminio de las insurrecciones para defender sus posiciones³.

Las resoluciones a favor de la Standard Fruit Company y la United Fruit Company, originaron una diáspora garífuna, extendida desde Dangriga, en Belice, hasta la Fe y Orinoco en Nicaragua. No obstante, hasta el día de hoy, ningún Estado centroamericano les reconoce como pueblo transfronterizo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, decreció el precio del banano que orilló el cierre de varias empresas. Muchos hombres garífunas reajustaron su trabajo tradicional, al enlistarse con las marinas mercantes de Gran Bretaña y Estados Unidos, para luego establecerse en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Nueva

Orleáns, considerado como el inicio de una emigración constante hacia ese país del norte.

En la década de los 90, los garífunas enfrentaron la contra reforma agraria, enmarcada en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola⁴, la cual permitió la venta de las tierras y las cooperativas campesinas surgidas en los años 70. Por su parte, la Ley de Propiedad, en su artículo 100, admitió la posibilidad de finiquitar los títulos comunitarios.

Bajo este marco legal, los garífunas enfrentan políticas que promueven la comercialización, el acaparamiento y la individualización de las tierras comunitarias ancestrales. Los invasores de sus territorios varían de acuerdo a los contextos, los han sido ganaderos, madereros, políticos, militares, empresarios, alianzas públicas y privadas, consorcios transnacionales y desde hace unos años, también grupos supuestamente ligados al tráfico ilícito de estupefacientes.

Las 159 concesiones mineras y las 33 licencias para la generación de energía, otorgadas desde 2009 por el Estado de Honduras en los departamentos donde habitan los garífunas⁵, bajo el amparo de la Ley de Minería y la Ley General de Aguas (las cuales permiten la explotación y extracción de las áreas protegidas), representan una amenaza para sus territorios. Además de las aprobaciones decretadas por el Congreso Nacional para la explotación petrolífera y la conformación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ciudades

modelo proyectadas dentro de 20 comunidades garífunas⁶.

La coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, explica que la cantidad de las concesiones cedidas por el Estado en las zonas garífunas, solamente se pueden estimar, «a pesar que existe una Ley de Transparencia, también está la Ley de Secretividad. Cuando pedimos que nos den la información, la niegan».

Esta conducta pública contradice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), notificado por Honduras en 1995, que otorga el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de manera previa,

libre e informada, para que sean ellos y ellas los que decidan el uso de su territorio ancestral. Pero en la práctica, muchas veces los garífunas se percatan de los proyectos de explotación al ver las máquinas de excavación.



Un hombre y una mujer garífuna de Vallecito, Colón, preparan sus habitaciones para descansar luego de un día agrícola. Hace cinco años en esta comunidad vivían cuatro personas, actualmente la habitan más de 50. Este territorio comunal es una reserva territorial para cualquier ciudadano de este grupo étnico que no tenga tierras para cultivar. La comunidad se encuentra ubicada a cuatro horas de La Ceiba, en una zona militarizada y con orientación al monocultivo de la palma africana.

Defensa ante los megaproyectos

Para la OFRANEH, perder el territorio ancestral diluiría la cultura garífuna y la reduciría a ser solamente un grupo afrodescendiente. Las políticas de explotación y extracción, así como las prácticas ilegales, amenazan a un pueblo con una visión particular sobre la propiedad, quienes practican tradiciones que reflejan su filosofía comunitaria, como es no cercar sus predios.

Como tierra colectiva, entienden los territorios ancestrales utilizados bajo un sistema de administración comunitario. La dinámica del uso territorial se basa en sus tradiciones antiguas que definen, distribuyen y regulan los derechos individuales y colectivos a la tierra, lo que suele llamarse como tenencia consuetudinaria. Las tierras

comunitarias son propiedad de y están gestionadas por hombres y mujeres que desarrollan diversas actividades, como la agricultura, la caza y la pesca, al utilizar los recursos naturales como bien común⁷.

En el libro *Sojourns of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garifunas*, la antropóloga estadounidense, Nancie González, en 1988 escribió que los garifunas «en Honduras son poco valorados, se refieren a ellos con desprecio, a pesar de que su música y su danza se promocionan como atracción turística, tanto en el país como en el extranjero»⁸.

Para construir el campo de golf del complejo turístico Indura Beach & Golf Resort, se rellenaron 80 hectáreas del humedal natural de la Laguna de Los Micos, un área protegido por la Convención Internacional para la Protección de Humedales. En estas tierras, agentes policiales bajo órdenes de los tribunales de Tela intentaron desalojar en dos ocasiones a 400 garifunas, al aducir que pertenecían a la Empresa Nacional Portuaria.

(Foto extraída de la página web de Indura Beach & Golf Resort).



Justamente en febrero de 2014, en coincidencia con una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), el complejo turístico Indura Beach & Golf Resort, inauguró sus instalaciones con la presentación de un grupo de tamborileros y bailarinas garífunas. Bajo el ritmo de la punta⁹, se cortó el listón rojo de este proyecto ubicado en 500 hectáreas a lo largo de 26 millas en la Bahía de Tela¹⁰.

Con un costo aproximado de 2,000 millones de lempiras (unos 91 millones de dólares), compuesto por fondos públicos y privados, al proyecto Indura -que en lengua garífuna significa Honduras-, lo rodea el mar Caribe, la Laguna de los Micos, el Parque Nacional Jeannette Kawas, la cabecera municipal de Tela y las comunidades garífunas de Miami, Barra Vieja, Triunfo y San Juan. Áreas en teoría, protegidas por las políticas ambientalistas.

«Son proyectos como estos los que nos motivan a creer en que la unión hace la fuerza y que en esta ocasión celebramos el éxito rotundo de una alianza entre dos sectores con una misma visión y objetivo que es el bien de esta nación, porque sólo creyendo e invirtiendo en el país se puede construir un mejor futuro para Honduras», manifestó Camilo Atala,

coordinador del proyecto turístico, calificado en 2015 por la agencia financiera Bloomberg, como el hombre más rico de Centroamérica -con un patrimonio de 1,400 millones de dólares¹¹-.

La declaración vertida por Atala, quien en 2016 fue denunciado ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Panamá, por el presunto delito contra la administración pública, blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores¹², contrasta con lo expuesto en 2014 por Idelfonsa Guzmán, una garífuna de 72 años.

«Estoy muriendo solo de pensar que si nos quitan nuestras tierras a dónde vamos ir a vivir. Aquí nació mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, mis hijos, mis nietos y bisnietos», dijo la habitante de Barra Vieja, una comunidad desplazada por las compañías bananeras, fundada en 1919 y registrada por la municipalidad de Tela en 1958¹³.

Lo manifestado por Idelfonsa describe las presiones y desalojos que enfrentan los garífunas de las comunidades aledañas al megaproyecto turístico, en un territorio ocupado por este pueblo desde 1885. Para la OFRANEH,

el interés por despojar a estas comunidades, forma parte de una estrategia económica y política para expulsar a las comunidades garífunas de la Costa Caribe o para convertirlos en el personal de limpieza de estos centros turísticos.

Donde antes eran tierras ancestrales, amparadas por la Convención Internacional para la Protección de Humedales, ahora hay un campo de golf con una superficie de 60 canchas de fútbol, que demanda 18 mil millones de litros de agua al año, un consumo anual equivalente al de 200 mil personas, casi la misma cantidad de población garífuna en Honduras.

El 3 de julio de 2015, el Tribunal de Sentencia de Tela acusó a 64 garífunas por el delito de usurpación en el caso del proyecto Indura, denunciados por la Empresa Nacional Portuaria (EPN) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Luego de largos procesos legales, que incluían visitas a los juzgados todas las semanas, fueron absueltos el pasado 9 de septiembre de 2016.

«Cuando los pueblos se ven amenazados, emigran. Prueba de ella es este proyecto turístico, que dejó a la comunidad de Tornabé sin ningún tipo de territorio para producir, ni para recolectar frutas. Es una situación terrible contra las mujeres, porque son las que producen. Estos proyectos afectan su economía, las cuales 80% son madres solteras. En Tornabé comprobamos que casi 70% de la comunidad que salió entre 2014 y 2015, fueron madres con sus hijos. Si por naturaleza el garífuna emigra, no es de esta manera», comenta Miriam Miranda.

De acuerdo a un estudio de la organización juvenil garífuna, Nanigu, de enero a agosto de 2014 emigraron más de 300 habitantes de Corozal hacia Estados Unidos, en su mayoría jóvenes de 12 a 30 años. Resalta el caso de Magda Meléndez, de 18 años, quien falleció en agosto de 2016, al caer de un tren mexicano durante su travesía migratoria. «Historias como la de ella antes no sucedían con los garífunas, demuestra que enfrentamos un fenómeno terrible, así como el deterioro de nuestras condiciones en Honduras», comenta Miranda.

Lo ocurrido en Barra Vieja no es aislado. Comunidades garífunas como Miami, San Juan, Triunfo, Tornabé, Santa

Fe, Vallecito, Sambo Creek, Puerto Castilla, Corozal, Nueva Armenia, Punta Piedras, Iona, Masca, Cusuna... se encuentran en situaciones similares, los proyectos e invasores varían, pero todos evidencian que el acaparamiento ilegal de las tierras ancestrales, es por lejos, una realidad pretérita.

Los testimonios reflejan lo señalado por el historiador hondureño, Marvin Barahona, en el prólogo de la investigación «Pueblos Indígenas y Garífunas de Honduras», escrito por el salvadoreño Ramón Rivas: (...) *el pasado de los pueblos indígenas y negros de Honduras no es, necesariamente, una historia superada por el presente. Por el contrario, nos demuestra con hechos, cifras, datos, pero, sobre todo, con el testimonio de los pobladores, que la injusticia, la explotación y la condición subordinada de los antiguos pobladores de Honduras, no son hechos por los cuales deba culparse exclusivamente a la conquista española, como se ha creído y repetido. Nos demuestra,*

que el desconocimiento y la negación de la humanidad de las etnias, como prejuicio contra su origen y el color de su piel, o como desprecio, conducta por la que tantas veces se ha condenado al etnocentrismo europeo, ha sido asumida por nosotros mismos en similares niveles de degradación y barbarie. (...) Negarlo es eximirnos de nuestras propias culpas del presente, es evadir cómodamente nuestro crimen poniéndolo en espaldas ajenas.

Este reportaje documenta el conflicto territorial de las comunidades de Vallecito y Nueva Armenia, situadas en los departamentos de Colón y Atlántida, respectivamente. Se exponen relatos de la defensa de sus tierras, de mujeres y hombres con la esperanza de recuperar lo hurtado, razón por la cual enfrentan amenazas, acoso, persecuciones, secuestros, ataques físicos, intimidaciones y judicializaciones.

Este es el único pueblo garífuna que no está a la orilla del mar Caribe -se encuentra a tres kilómetros-, pero más que un inconveniente, los pobladores lo consideran una ventaja, debido a la erosión costera que enfrentan las demás comunidades, la cual consiste en la desintegración y eliminación gradual de sus playas.



VALLECITO: LA RESERVA GARÍFUNA

Desde 1804

Cuatro garífunas instalan una tienda de campaña en Vallecito, una comunidad aislada frente al océano Atlántico. Cazan, pescan y por temporadas, cultivan. A su alrededor revolotean seis perros que les acompañan, animales famélicos con orejas largas. El acampamiento durará de cuatro a cinco días. Su objetivo es capturar tepezcuintles, mapaches, conejos, cusucos e iguanas. «Venimos a buscar comida», comenta el mayor de ellos, mientras se acomoda sus botas de hule, «todo menos venados».

Esta escena no se ambienta en 1750 en San Vicente, es Honduras en 2016. Los monteros apenas hablan español, prefieren comunicarse en garífuna, un idioma, que, de acuerdo a algunos investigadores, es una mezcla de otras lenguas, como el arawak, el francés, el yoruba, el swahili y el bantú¹⁴.

Vallecito se sitúa en el municipio de Limón, a 75 kilómetros de Trujillo. Son 1,600 hectáreas con presencia garífuna desde 1804, tras ser desplazados por los españoles de la bahía de Trujillo hacia el río Sico. En sus manos muestran los papeles que les acreditan como dueños de este territorio, títulos que han presentado infinidad de veces ante los juzgados y el Instituto Nacional Agrario (INA).

A través de las décadas, los contextos varían sin mermar las adversidades de estos pobladores originarios. Durante los años 80, cuatro diferentes ejércitos se establecieron en la región, por lo cual muchos garífunas emigraron a otras comunidades o al exterior.

En estos parajes casi selváticos, el gobierno hondureño cedió al ejército estadounidense 5,724 hectáreas, para instalar en 1983 el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). Contiguo a Vallecito, los norteamericanos entrenaron a militares salvadoreños, hondureños y de la contra nicaragüense, para combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que, en Centroamérica favorecieran o apoyaran al comunismo¹⁵. Un contexto hostil para cualquier manifestación social en la zona.

A photograph of a man in a red t-shirt and a cap sitting on a wooden structure in a tropical setting. A large black and white dog is in the foreground, looking towards the right. The background shows lush greenery and palm trees.

Un cazador garífuna descansa en las antiguas instalaciones del «Rancho El Dorado», una villa construida por un invasor dentro del territorio ancestral. Supuestamente también lo utilizó para el tráfico aéreo de estupefacientes desde Sudamérica. Desde 2004 hasta 2011, los pobladores de esta etnia tenían prohibido su ingreso.

Con la extenuación de las guerras civiles en los países vecinos, el CREM cerró operaciones en 1990, dejando las tierras a albedrío del gobierno hondureño, quien las vendió bajo el amparo de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, a terratenientes, corporaciones, policías, militares, ganaderos y políticos. Con ello, los antiguos latifundistas de la zona ampliaron sus cercos y otros nuevos actores aparecieron en la recomposición territorial de la región.

Aunque el cierre del CREM conllevó nuevas dificultades para los campesinos del departamento de Colón, un grupo de jóvenes garífunas, afiliados al movimiento «Iseri Lidamari» y con el apoyo de la OFRANEH, retomaron los esfuerzos por recuperar las tierras de Vallecito, obteniendo en 1995 el título comunitario.



Vallecito se sitúa en el municipio de Limón, a 75 kilómetros de Trujillo. Son 1,600 hectáreas con presencia garífuna desde 1804, tras ser desplazados por los españoles de la bahía de Trujillo hacia el río Sico.

Invasión palmera

«Las acreditaciones son nuestro respaldo, pero sabemos que en Honduras tener títulos no es garantía de respeto, en la práctica existe un sistema que permite su violación, capaz de otorgar certificados sobre certificados y no castigar las invasiones», explica la lideresa garífuna, Miriam Miranda.

En efecto, la obtención en 1995 del título comunitario de Vallecito no evitó que, ese mismo año, la Corporación Dinant, una agroexportadora fundada por Miguel Facussé (1924-2015), tomara cien hectáreas del territorio garífuna para extender el cultivo de palma africana de su Finca Farallones, colindante con las tierras ancestrales.

Con esta invasión, la comunidad enfrentó a un consorcio poseedor de una quinta parte de las tierras agrícolas del Bajo Aguán, también favorecido con el cierre del CREM y presunto involucrado en otros conflictos de tierra, como en la

masacre de cinco campesinos en la finca de El Tumbador¹⁶, un predio cercano a Vallecito.

A medida que las palmas africanas crecían, los garífunas visitaron durante nueve años los juzgados. Presentaron una y otra vez los títulos. Los abogados de Facussé adujeron tener también acreditaciones legales. Hasta que, en 2004, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) favoreció a la comunidad garífuna. Siendo una de las pocas resoluciones legales contra la Corporación Dinant, tras su fundación en 1960.

«Facussé se adueñó de nuestras tierras, como lo hizo en muchos otros lados. Pero tras casi una década de lucha, las recuperamos. Él nos había robado un área donde sembró palmas africanas.

Pero a nosotros no nos gusta la palma, porque vuelve estéril la tierra», explica Karen García, coordinadora de la comunidad de Vallecito.

El año 2004 significó la recuperación de las 100 hectáreas, pero también el inicio de otra invasión en el territorio de Vallecito. Un acaparamiento a punta de pistola, que no solo incluía el suelo, sino también el cielo de las tierras garífunas.

De la palma a la pista

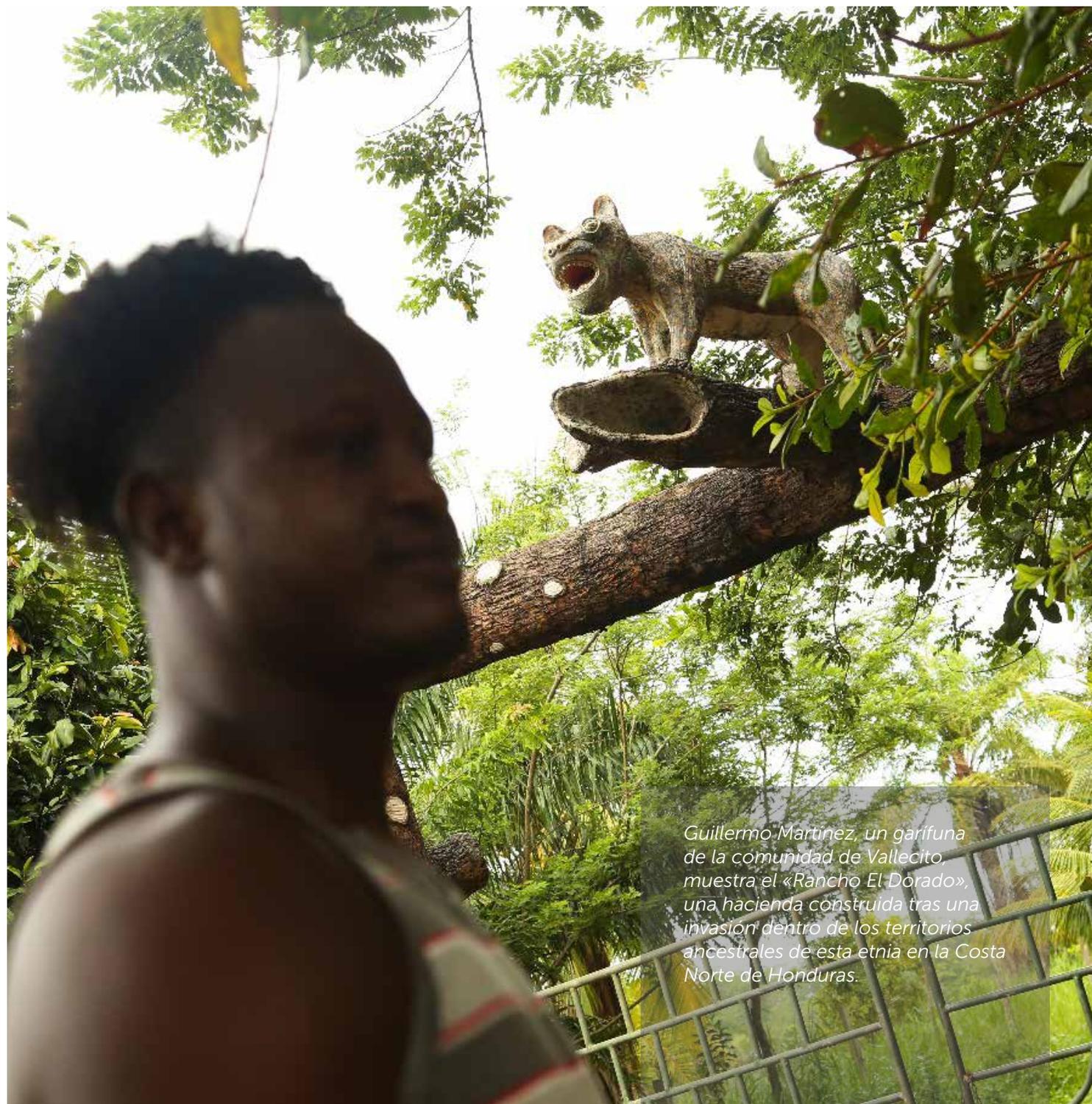
Los cuatro cazadores acampan en los vestigios del «Rancho El Dorado», una villa de acceso prohibido para los garífunas desde 2004 a 2011. «Nosotros estuvimos siete años sin poder entrar hasta acá, teníamos limitado el acceso a nuestros territorios ancestrales», recuerda Guillermo Martínez, un poblador de Vallecito.

Ahora el rancho yace abandonado, literalmente en ruinas. De él solo queda en pie una estatua de cemento en su portón principal, que asemeja la figura de un jaguar en posición de asalto, y los residuos de una fuente de agua que decoraba el patio, donde según los habitantes, «antes estaba repleto de guardias de seguridad altamente armados».

El rancho es la antigua finca de Reinaldo Villalobos, un terrateniente originario de San Francisco de Coray, un municipio ubicado al sur de Honduras. Con su llegada a Vallecito en 2004, los garífunas se asentaron en las 100 hectáreas recuperadas tras la disputa con la Corporación Dinant, porque en el resto del territorio ancestral, Villalobos levantó seis portones resguardados por hombres armados.

El despojo fue violento. En 2004, el garífuna Santos Euquerio Bernárdez Bonilla, apareció

asesinado a machetazos¹⁷. Él era un compositor de música tradicional y vicepresidente de una de las seis cooperativas instaladas en Vallecito, quien, además de construir un legado cultural para su etnia, defendía el territorio¹⁸. Este crimen ocurrido en el departamento de Colón, que en 2015 presentó una tasa de homicidios 10 veces mayor a la mundial, permanece impune.



Guillermo Martínez, un garífuna de la comunidad de Vallecito, muestra el «Rancho El Dorado», una hacienda construida tras una invasión dentro de los territorios ancestrales de esta etnia en la Costa Norte de Honduras.

Miembros de la OFRANEH comentan que la expoliación territorial de 2004 en Vallecito, evocó en la memoria de los garífunas, el ocurrido en Puerto Castilla, cuando en 1977, el General Gustavo Álvarez Martínez, fundador del «escuadrón de la muerte» denominado como «Batallón 3-16», pistola en mano, obligó a la Comunidad de Cristales y Río Negro a ceder las tierras del paraje conocido como La Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (ENP)¹⁹.

Para llegar a las ruinas del «Rancho El Dorado», se entra por los cultivos de palma africana sembrados por la Corporación Dinant. Una calle pedregosa de unos cuatro kilómetros conduce a Vallecito. A pocos metros de la comunidad, hay una vía con las huellas de un medio de transporte compuesto por tres llantas, «porque una avioneta tiene tres ruedas», revela Guillermo, esposo de la coordinadora de la comunidad de Vallecito.

Es el rastro de una pista clandestina de aterrizaje, construida tras la invasión de Raimundo Villalobos. Una práctica ilegal pero frecuente en Colón, uno de los departamentos más utilizados del territorio nacional para dicha actividad ilícita, ya sea de forma aérea o marítima. Según datos de la Red de Seguridad y Defensa de

América Latina (Resdal), Honduras sirve como punto de aterrizaje para 79% de los vuelos que transportan estupefacientes desde América del Sur²⁰.

«Todas las semanas escuchábamos avionetas que aterrizaban y sobrevolaban por encima de nuestro campamento, que por protección lo teníamos en otra parte del territorio», detalla Guillermo.

Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), en esta región opera la banda criminal de Los Cachiros, a quienes se les calcula un patrimonio neto de casi mil millones de dólares²¹.

El tráfico de drogas en este departamento se realiza a pesar de su militarización. Desde Tocoa hasta Vallecito, unos siete retenes del ejército interrumpen el trayecto de dos horas. Los soldados verifican los vehículos y consultan el motivo del viaje de los pasajeros.

Un par de militares que venden una rifa a los transeúntes, contrastan con el gasto del ejército hondureño para el combate contra el narcotráfico. En la asesoría y compra de equipo militar a Estados

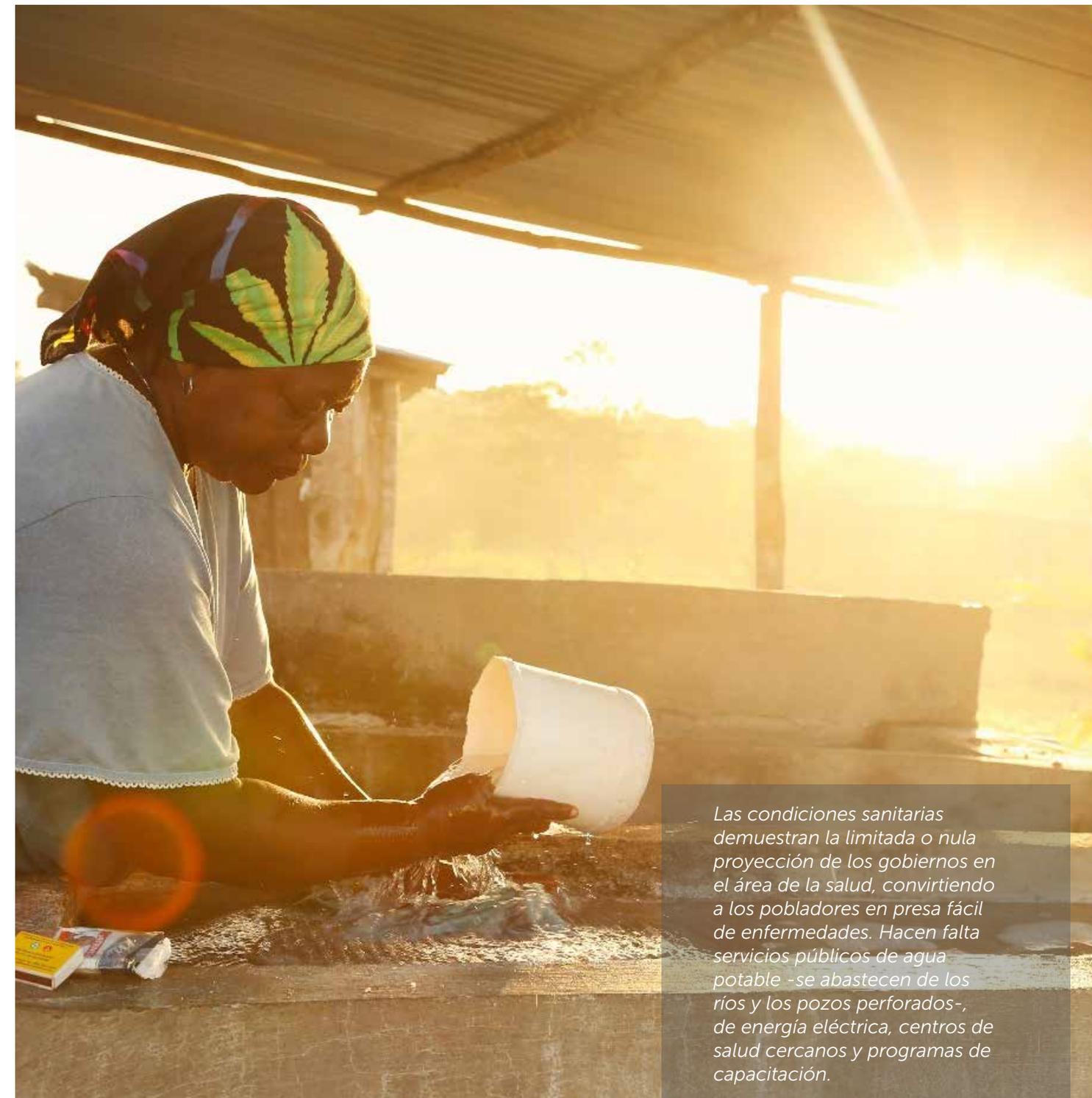
Unidos, Honduras gastó 1,518 millones de dólares entre 2004 y 2014 (el 75.3% del total regional). Un monto que supera al de los demás países de Centroamérica. Por ejemplo, a los 91 millones de dólares desembolsados por Guatemala durante el mismo periodo²².

La presencia militar no detiene el tráfico aéreo y marítimo de estupefacientes, «todavía escuchamos el ruido de las avionetas que sobrevuelan», añade la garífuna Carmen Álvarez, quien se opone a la militarización de los territorios garífunas.

«Exigimos la desmilitarización de los territorios garífunas. En diciembre del año pasado, en Iriona, asesinaron a dos jóvenes de nuestras comunidades. La Fuerza Naval les atacó, aduciendo que estaban sacando droga de los ríos, pero realmente se les había atascado el carro. Diez uniformados les dispararon, lo que hizo el ejército fue darles vacaciones con prisión preventiva dentro de sus instalaciones. Pero seguramente ya andan de nuevo en servicio», añade Miranda.



La esperanza de los garífunas de Vallecito para sobrevivir ante un poder que le supera, es haber subsistido siempre a partir de su propio esfuerzo y del entorno, el cual ha sido su reserva de bienes materiales y culturales.



Las condiciones sanitarias demuestran la limitada o nula proyección de los gobiernos en el área de la salud, convirtiendo a los pobladores en presa fácil de enfermedades. Hacen falta servicios públicos de agua potable -se abastecen de los ríos y los pozos perforados-, de energía eléctrica, centros de salud cercanos y programas de capacitación.



Una garífuna prepara los alimentos en la cocina comunitaria de Vallecito. La dieta de estos pobladores se basa en el casabe, frijoles, productos marinos, cocos, arroz, yuca, mangos, papayas y piñas.

El accidente y el rapto

Según reportes policiales, Reinaldo Villalobos se ahogó en 2011 tras un accidente en su lancha. Una elegía popular con forma de corrido, cantada por un grupo musical que evoca a las agrupaciones norteñas de México, se refiere al incidente de la siguiente forma: «(...) *Reinaldo era valiente, también era un hombre honrado/ Tuvo encuentros con la muerte, siempre salía librado/ Perdió a alguno de sus hombres, cumpliendo con su trabajo/ Con su R-15 en la mano, sabía cómo dispararlo/ Mandó a varios al infierno/ Nadie podía imaginarse que moriría ahogado/ Aunque hay varios accidentes que dicen ser provocados (...)»²³.*

Tras su muerte, en agosto de 2012, su esposa, de origen colombiano, intentó vender la propiedad de Vallecito, pero los garífunas reclamaron de nuevo la legalidad de la tierra²⁴. Un año después, ella apareció asesinada por desconocidos.

Inicialmente el proceso de legalización fue interrumpido, debido a que las fuerzas públicas de seguridad no otorgaron la protección exigida por los representantes del INA para medir el territorio. Pero a raíz de la presión internacional, y por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se logró de nuevo certificar las tierras a favor de los garífunas.

Dos años después que muriera Villalobos, soldados de las Fuerzas Armadas dinamitaron la pista para deshabilitarla, pero las estructuras criminales permanecieron. El 17 de julio de 2014, Miriam Miranda y al menos 20 habitantes de Vallecito, fueron amenazados a muerte y raptados unas horas por hombres armados que presuntamente intentaban rehabilitar el sitio de aterrizaje.

El incidente atemorizó a los pobladores garífunas. En un país como Honduras, señalado por la organización no gubernamental Protection International, como el más peligroso del mundo para los ambientalistas y defensores de derechos humanos, la vulnerabilidad intimidada²⁵.



La lejanía de Vallecito con el mar limita la pesca, pero también especializa a los pobladores en la agricultura, ya sea colectiva, y si se solicita, también de manera individualizada. Una actividad compleja que, en invierno, los campos de siembra se empantanar y durante el verano, la zona es afectada por la sequía.

Junto a Miranda, desprotegida a pesar de las medidas cautelares impuestas por la CIDH, la coordinadora de la comunidad de Vallecito, Karen García, presenció el incidente del 17 de julio, «la noche anterior no dormimos porque se escuchaba el ruido de unas motosierras. En la mañana hicimos una inspección de rutina, ahí encontramos que habían cortado los pinos para tapar los hoyos y habilitar la pista. En eso un carro se detuvo al lado de nosotros, con tipos armados. De repente atacaron a dos compañeros y a la compañera Miriam. Yo pude esconderme, pero no me fui de la zona, me quedé cerca para estar pendiente. Un compañero logró denunciar por una emisora de radio lo que ocurría, hasta que los soltaron».

Un comunicado de la OFRANEH detalló: «la impunidad con que actúan los grupos armados en la zona de Colón, demuestra que la estrategia del desarme es imaginaria, ficticia, porque los sicarios que raptaron a Miriam y a 20 compañeros garinagüs en Vallecito, estaban armados y con el rostro descubierto»²⁶.

Dos años han transcurrido desde el rapto. Los cazadores dialogan donde antes no podían ingresar. Uno de los perros husmea un hueco perforado en la estructura destartada del rancho.

«Después que muriera Villalobos, supuestamente alguien encontró un paquete de dinero enterrado en esta casa. Entonces los demás empezaron a buscar por todos lados», explica Guillermo. En países como Honduras, Colombia o México, estas historias o mitos son relativamente frecuentes.

Los cuatro hombres no cazan específicamente para conservar una tradición, lo hacen por comida, por necesidad. Probablemente son víctimas o presas, de lo que Miriam Miranda, define como una nueva «colonización de explotación territorial», permitida y fomentada por el Estado, también ejercida por actores y consorcios privados quienes, si lo requieren, actúan por encima de la ley.

Pese a las amenazas, el acoso y el asedio constante, los pobladores de Vallecito han logrado ejercer momentáneamente el derecho a la propiedad colectiva. El título es un respaldo, pero su esperanza de garantía es la defensa tenaz de su territorio.



Dos jóvenes garifunas de la comunidad de Vallecito, comparten dentro de una casa las últimas horas del día que tienen con luz eléctrica. Este asentamiento no tiene acceso a la energía eléctrica, por lo cual utilizan una planta de gasolina que encienden un par de horas por las mañanas y en las noches.

Una comunidad, una reserva

Al considerar que la cultura garífuna tiene históricamente una estructura familiar, en su mayoría de carácter matrifocal, es decir, centrada en la figura materna, no sorprende que la defensa de sus territorios o la coordinación de muchas de sus comunidades, recaen en las mujeres. Como es el caso de Karen García en Vallecito.

Cuando Karen, originaria de San Juan, Tela, llegó en 2012 a Vallecito, encontró apenas cuatro garífunas. Todos hombres. Los demás habían emigrado a raíz de los conflictos. Bajo estas condiciones, su encomienda era convertir el asentamiento en una reserva para los pobladores de esta etnia.

Esa finalidad se entiende bajo la disputa territorial, «la recuperación de estas tierras ha sido una lucha ardua, una parte estaba en manos de Facussé y la otra del narcotráfico. Pero vemos que muchos garífunas en otras zonas se están quedando sin sus predios, por eso Vallecito ahora es un refugio para todos y todas que deseen

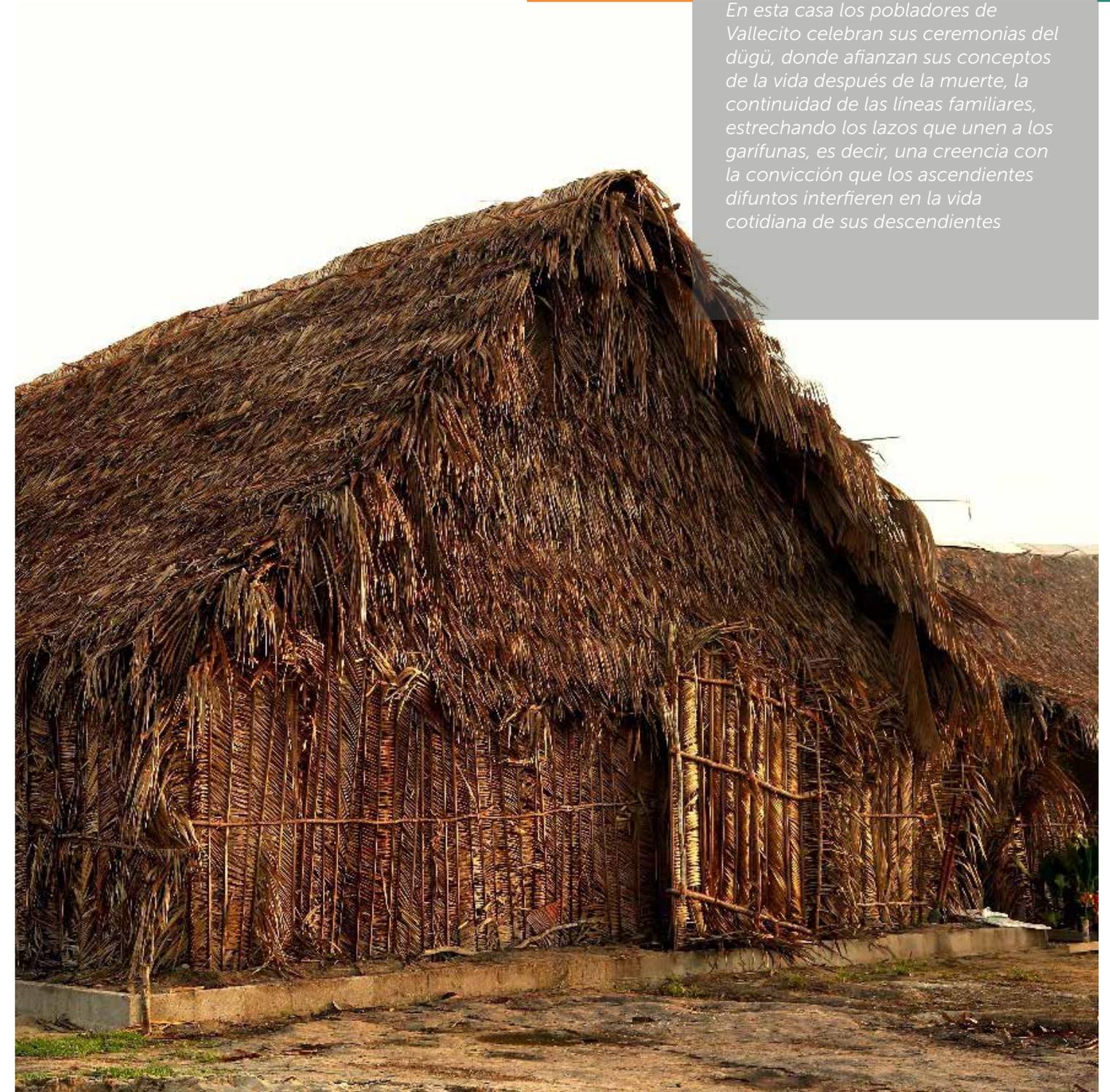
venir, acá hay 1,600 hectáreas para ser cultivadas por nuestra gente», explica su coordinadora.

Cuatro años bajo su administración comunitaria bastaron para atraer a 20 familias, «las personas que viven acá son de diferentes comunidades, pero ahora dicen que son de Vallecito», comenta. Pero nada ha sido sencillo. Ni recuperar el territorio, ni aproximar a la gente, ni crear identidad comunitaria.

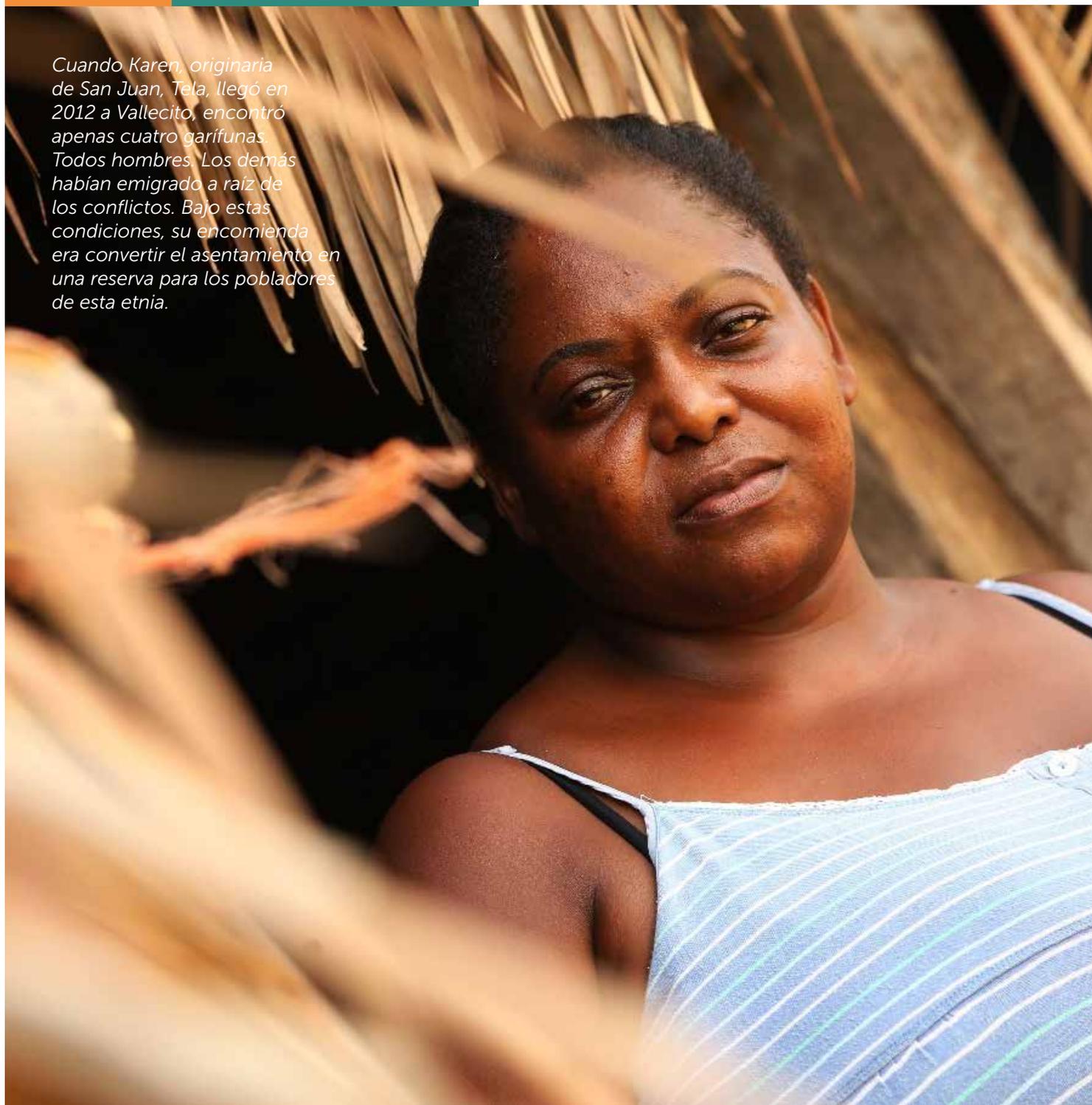
A pesar que la perspectiva tradicional de género en la cultura garífuna, podría decirse, es más abierta que en las otras siete etnias hondureñas, la coordinadora confiesa haber enfrentado el machismo de los hombres, «hay veces no me querían hacer caso, les costaba entender que fuera una mujer la que orientara a la comunidad».

Este es el único pueblo garífuna que no está a la orilla del mar Caribe -se encuentra a tres kilómetros-, pero más que un inconveniente, los pobladores lo consideran una ventaja, debido a la erosión costera que enfrentan las demás comunidades, la cual consiste en la desintegración y eliminación gradual de sus playas. Su lejanía con el mar limita la pesca, pero también los especializa en la agricultura, ya sea colectiva, y si se solicita, también de manera individualizada. Una actividad compleja porque, en invierno, los campos de siembra se empantanar y durante el verano, la zona es afectada por la sequía.

En esta casa los pobladores de Vallecito celebran sus ceremonias del dügü, donde afianzan sus conceptos de la vida después de la muerte, la continuidad de las líneas familiares, estrechando los lazos que unen a los garífunas, es decir, una creencia con la convicción que los ascendientes difuntos interfieren en la vida cotidiana de sus descendientes



Cuando Karen, originaria de San Juan, Tela, llegó en 2012 a Vallecito, encontró apenas cuatro garífunas. Todos hombres. Los demás habían emigrado a raíz de los conflictos. Bajo estas condiciones, su encomienda era convertir el asentamiento en una reserva para los pobladores de esta etnia.



Una de las primeras construcciones que edificaron fue el centro ceremonial, una casa de paja donde prohíben que se tomen fotografías de su interior. Ahí ejercen sus cultos y ritos, en su mayoría, prácticas religiosas como las ofrendas a sus ancestros, muestra de la relación que tienen los garífunas con el pasado y el presente, un recordatorio a sus orígenes comunes, a sus problemas mutuos y a su unidad étnica y espiritual.

En las ceremonias del dügü afianzan sus conceptos de la vida después de la muerte, la continuidad de las líneas familiares, estrechando los lazos que unen a los garífunas, es decir, una creencia con la convicción que los ascendientes difuntos interfieren en la vida cotidiana de sus descendientes²⁷.

Las misiones para evangelizarlos no se han abstenido, desde sus orígenes hasta el presente. Cabe recordar cuando el misionero catalán Manuel de Jesús Subirana catequizó y bautizó a 2,000 garífunas en la Costa Norte de Honduras, entre 1861 y 1864, juzgándolos como «diabólicamente supersticiosos». Pero a pesar de la militante faena misionera, ellos mantienen su propio sistema religioso, una mezcla sincrética de las tradiciones africanas y amerindias.

Alrededor del centro ceremonial, las viviendas combinan materiales que les proporciona su entorno y el comercio en esta remota región: bahareque, yagua, caña brava, bloque, paja y zinc. La concepción arquitectónica es tradicional, más que en las comunidades garífunas cercanas a las ciudades, donde la costumbre se compagina con la urbanidad.

Las condiciones sanitarias demuestran la limitada o nula proyección de los gobiernos en el área de la salud, convirtiendo a los pobladores en presa fácil de enfermedades. Hacen falta servicios públicos de agua potable, de energía eléctrica, centros de salud cercanos y programas de capacitación. Bajo estas condiciones, 62% de los niños garífunas en edades comprendidas entre 0 y 12 años, presentan síntomas de desnutrición.

«La situación de salud de la comunidad garífuna es bastante caótica, mucho pasa por la alimentación y la ausencia de políticas públicas de sanidad», explica Carmen Álvarez, coordinadora de la OFRANEH

en el área de Salud, en la rama de medicinas tradicionales, para atender a los pobladores de las 48 comunidades.

Las adversidades económicas no impidieron que la organización comunal instalara una escuela unidocente. Evelin Marín, una joven garífuna, es la maestra para los 15 niños y niñas inscritas en seis grados. La OFRANEH paga su salario. A un lado donde antes había una caballeriza del «Rancho El Dorado», la docente imparte la educación bilingüe. Ella por momentos explica en español y los alumnos responden en garífuna, lengua considerada en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad²⁸.



Evelin Marín, una joven garífuna, es la maestra para los 15 niños y niñas inscritas en seis grados. OFRANEH paga su salario. A un lado donde antes había una caballeriza del «Rancho El Dorado», la docente imparte la educación bilingüe.

Frente a un Estado incapaz de resolver los conflictos territoriales, el fallecimiento de Raimundo Villalobos, fue la oportunidad del pueblo para retomar su derecho a la propiedad colectiva y ancestral. Pero tampoco significó la desaparición de las amenazas. «Hace como dos meses fui al centro de salud de Limón, de repente entró un muchacho que se levantó la camisa para enseñarme el arma. Yo no lo conocía. La cabecilla del narcotráfico nunca se deja ver, pero hay muchas personas ligadas a esas estructuras criminales», comenta Karen, madre de tres hijos.

A falta de energía eléctrica, las noches en Vallecito parecen más prolongadas. Como si la oscuridad dilatara el tiempo. Por ahora, si las autoridades públicas lo permiten, la antigua pista clandestina de aterrizaje, antes iluminada por plantas de gasolina, no es más que un camino oscuro para el paso vehicular y peatonal. Así lo exigen los garífunas: no más aeronaves sudamericanas cargadas de estupefacientes en su territorio y no más grupos de hondureños invasores como receptores.

Su resistencia merece el respaldo del Estado, pero carece de cualquier tipo de apoyo público. Es más un compromiso comunitario frente a un problema transnacional. Su esperanza para sobrevivir ante un poder que les supera, es haber subsistido siempre a partir de su propio esfuerzo y del entorno, el cual ha sido su reserva de bienes materiales y culturales.

Los cazadores acampados en las ruinas del rancho, probablemente permanecen sigilosos al empuñar sus lanzas ante cualquier movimiento de su presa. La luna ilumina las tierras ancestrales. Luz suficiente para que un grupo de jóvenes improvisen con las sillas y mesas, la percusión que acompaña a dos menores de edad que vocalizan una tonada en su lengua originaria. Un pequeño espacio les basta para resistir con alegría.

En Nueva Armenia los garífunas creen que sembrando solidaridad con otros pueblos pueden cosechar también solidaridad para con ellos. Saben que la defensa y conquista de sus derechos territoriales debe ser un compromiso nacional y fraterno. Ellos no piden, reclaman.



NUEVA ARMENIA ENFRENTA EL DESTIERRO

Concesiones por kilómetros

En Honduras cuando el nombre de un pueblo es antecedido por el adjetivo de «nueva o nuevo», no es un adorno, lo que describe es probablemente un desplazamiento. Por citar un ejemplo, la antigua aldea de Palo Ralo en el departamento de Francisco Morazán, pasó a llamarse la Nueva Palo Ralo, tras ser trasladada geográficamente por la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras». La historia se repite en el país, con diferentes matices. Nuevo Rosario. Nuevo Jalapa. Nueva Arcadia. Nueva Palestina... y Nueva Armenia, una comunidad garífuna en el departamento de Atlántida, a 156 kilómetros de distancia de Vallecito.

La antigua comunidad de Armenia se ubicaba en el municipio de Jutiapa, cercana a la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Ahí habitaba un grupo garífuna desde el siglo XIX. Pero en 1924, esta población fue desplazada a la margen izquierda del río Papaloteca por la empresa Vaccaro Brothers Company, que dos años después se convertiría en la Standard Fruit

Company. Así, la compañía frutera se apoderó del delta del río, y al otro costado, se fundó Nueva Armenia.

Cabe recordar que a partir de 1911 el Gobierno hondureño intensificó su política concesionista con la inversión extranjera. La presunta intención era desarrollar y modernizar la economía del país, bajo el paradigma del progreso. A las empresas foráneas se les entregaron tierras, a cambio del establecimiento de la infraestructura de transporte y comunicación, en teoría, para incrementar la comercialización de los productos agrícolas y el desarrollo de la agricultura en zonas fértiles, pero poco habitadas²⁹. Pero bajo la mesa las concesiones arrastraban sobornos, armas y apoyo para los caudillos nacionales.

En 1968 la Standard Fruit Company fue adquirida por la Castle & Cooke Corporation, quien la renombró como la Dole Food Company, misma que cerró operaciones en la Costa Norte hasta 1995.

Tras su cierre, los pobladores de Nueva Armenia exigieron regresar a su antiguo territorio, pero de acuerdo a la OFRANEH, paulatina y de forma amañada, la municipalidad repartió las tierras ancestrales a otros grupos, supuestamente palmeros.

No obstante, el INA le otorgó a la comunidad un título de propiedad en 1994, el cual reconoció 169 hectáreas. Desde un inicio los garífunas indicaron la insuficiencia del territorio concedido, por no abarcar el total de las tierras ancestrales de la antigua Armenia. Pero los reclamos no fueron atendidos.

En la actualidad, Nueva Armenia se encuentra ubicada en un paraje inundable, al encontrarse en un humedal, entre el delta del río y la laguna de Cacao, lo que lo vuelve uno de los lugares más vulnerables en la Costa hondureña.

En 2013, se reabre un capítulo de su historia, con la decisión de recuperar sus tierras.

Vecinos de luchas

Carolina Castillo García y Jesús Flores Satuyé son vecinos en Nueva Armenia. Los separan un par de casas. Ambos son sexagenarios. Cuando no habían nacido, sus familias fueron despojadas por la Standard Fruit Company. Él se ha dedicado al buceo, ella a la agricultura. A los dos les quemaron sus casas cuando se disponían a cultivar el territorio ancestral en recuperación. Él tiene tres heridas de bala y ella cuatro acusaciones por el delito de usurpación de tierras.

Al encontrarse se saludan. Jesús Flores muestra su mano afectada por el impacto de un proyectil. La cicatriz y la inmovilidad de su extremidad izquierda se remonta a enero de 2001, cuando miembros de la Fuerza Naval de Honduras, en los Cayos Cochinos, le dispararon por pescar supuestamente en una zona coralina protegida, en un archipiélago donde él capturaba langostas y peces desde que era un niño. Desde el suceso no volvió a ver su cayuco. A través de la OFRANEH, este caso se presentó ante la CIDH, como denuncia

de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas en las zonas garífunas.

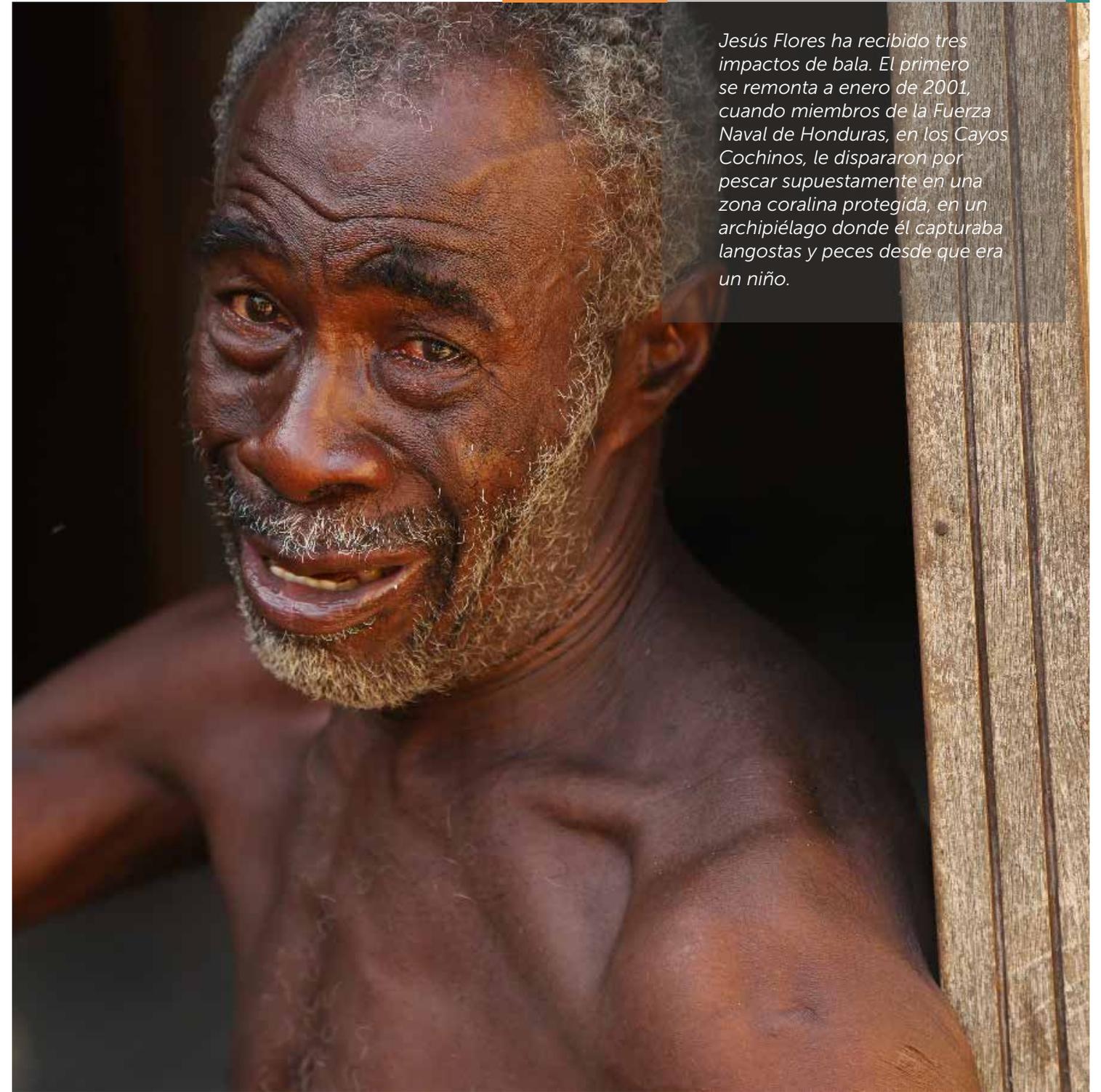
Cuando muestra las otras dos lesiones de bala, llora. «El 26 de febrero de 2015 nos quemaron las casas. A las siete de la mañana íbamos a cultivar la tierra, cuando un grupo de hombres nos tirotearon. Me pegaron en la pierna y en la cabeza. Esa fue la segunda vez que miré la muerte. Sentir el plomo es como si a uno le tiraran agua caliente. Ahora solo espero recobrar la salud, estoy hambreado», explica este hombre de 60 años. Carolina lo consuela, le dice que todo saldrá bien, que recuperarán sus tierras. Él asiente. La esperanza lo mantiene vivo.

A ella la comunidad no la conoce como Carolina, sino como Cayoya. Tiene 63 años. Es una mujer enérgica, por las mañanas cultiva y por las noches aprende a leer y escribir. También a ella le quemaron su casa en la margen derecha del río Papaloteca, donde antes vivían sus ancestros, en un territorio de 150 manzanas, sembradas de plátano, yuca y cacao.

A ella la comunidad no la conoce como Carolina, sino como Cayoya. Tiene 63 años. Es una mujer enérgica, por las mañanas cultiva y por las noches aprende a leer y escribir. También a ella le quemaron su casa en la margen derecha del río Papaloteca, donde antes vivían sus ancestros, en un territorio de 150 manzanas, sembradas de plátano, yuca y cacao.



Jesús Flores ha recibido tres impactos de bala. El primero se remonta a enero de 2001, cuando miembros de la Fuerza Naval de Honduras, en los Cayos Cochinos, le dispararon por pescar supuestamente en una zona coralina protegida, en un archipiélago donde él capturaba langostas y peces desde que era un niño.

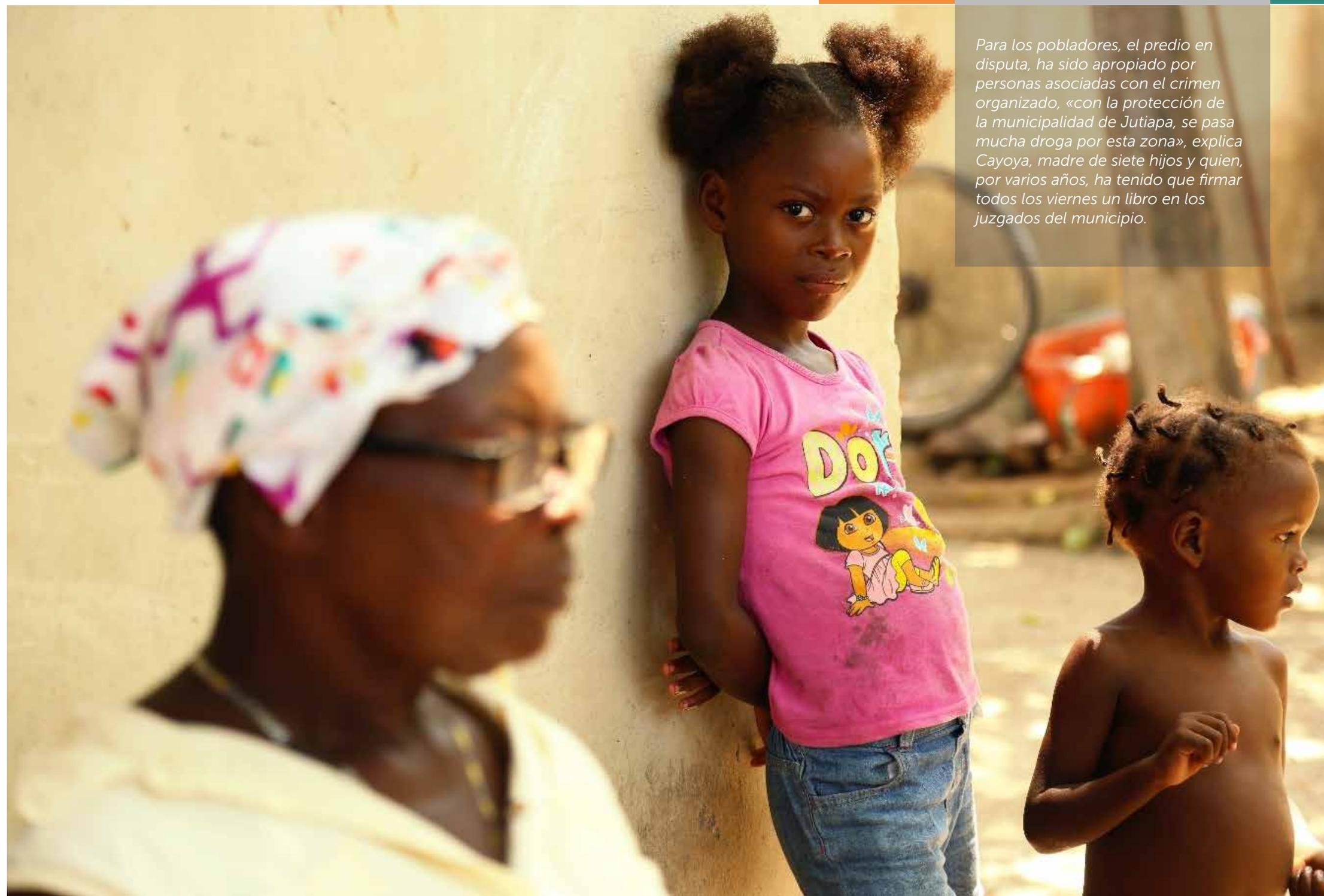


Cuando Jesús recibió los disparos, ella lo atendió. Eso fue el 26 de febrero de 2015, después que un grupo de desconocidos encapuchados y montados en caballos, los atacaron a balazos e incendiaron algunas casas del predio. En el territorio se encontraban 40 habitantes de Nueva Armenia, miembros de la OFRANEH. Algunos de ellos emigraron tras el incidente.

«La fiscalía ordenó que se pagaran los daños, pero no hemos recibido nada. Más bien nos demandaron a 82 personas por supuestamente usurpar las tierras, las nuestras. Nos dijeron que el 24 de abril nos iban a dar las cartas de libertad, pero seguimos esperándolas», comenta Carolina Castillo, quien aduce que a ella los invasores le ofrecieron 200 mil lempiras (poco menos de 7 mil dólares) para abandonar el proceso de recuperación.

Según la OFRANEH, detrás de los sicarios hay intereses de latifundistas, palmeros y supuestos narcotraficantes. «Esa gente tienen un gran poder, están fuertemente armados», expresó Alfredo López vicepresidente de esta organización y corresponsal de Radio Progreso en la zona.

Un comunicado de la OFRANEH explica que el delta del Papaloteca y sus tierras aledañas, fueron utilizadas durante años como pistas clandestinas de aterrizaje, bajo el registro de una compañía dedicada a la siembra de palma africana, pero las denuncias fueron obviadas.



Para los pobladores, el predio en disputa, ha sido apropiado por personas asociadas con el crimen organizado, «con la protección de la municipalidad de Jutiapa, se pasa mucha droga por esta zona», explica Cayoya, madre de siete hijos y quien, por varios años, ha tenido que firmar todos los viernes un libro en los juzgados del municipio.

El 8 de agosto de 2014 ardieron sus viviendas y cultivos de subsistencia. Ese día fueron detenidos 11 garífunas por agentes de la Policía Municipal de Jutiapa, autoridades que supuestamente fueron los responsables de quemar las cabañas. El suceso también se repitió en los primeros días de octubre de ese mismo año, por hombres que alegaron haber sido enviados por el «propietario» de las tierras en cuestión. En total, han quemado 76 casas de los garífunas.



La mañana que hirieron a Jesús, no era el primer intento de desalojo. El 8 de agosto de 2014 ardieron sus viviendas y cultivos de subsistencia. Ese día fueron detenidos 11 garífunas por agentes de la Policía Municipal de Jutiapa, autoridades que supuestamente fueron los responsables de quemar las cabañas. El suceso también se repitió en los primeros días de octubre de ese mismo año, por hombres que alegaron haber sido enviados por el «propietario» de las tierras en cuestión. En total, han quemado 76 casas de los garífunas.

Para los pobladores, este predio, bautizado bajo el nombre de África, ha sido apropiado por personas asociadas con el crimen organizado, «con la protección de la municipalidad de Jutiapa, se pasa mucha droga por esta zona», explica Cayoya, madre de siete hijos y quien, por varios años, ha tenido que firmar todos los viernes un libro en los juzgados del municipio.

Carolina y Jesús destacan la articulación garífuna en los procesos de recuperación de sus tierras y de otros grupos étnicos. «Cuando mataron a Berta Cáceres,

nosotros fuimos los primeros en acompañar al pueblo lenca; también cuando secuestraron a Miriam Miranda y a los demás pobladores de Vallecito, ahí estuvimos, resguardando lo que nos pertenece», añade Carolina.

En Nueva Armenia los garífunas creen que sembrando solidaridad con otros pueblos pueden cosechar también solidaridad para con ellos. Saben que la defensa y conquista de sus derechos territoriales debe ser un compromiso nacional y fraterno. Ellos no piden, reclaman.

NOTAS

- 1 Ramón D. Rivas, «Pueblos Indígenas y Garífuna de Honduras», 1993
- 2 http://www.ofraneh.org/ofraneh/Historia_titulacion.html
- 3 <http://nacerenhonduras.com/2009/05/historia-de-las-companias-bananeras-en.html>
- 4 http://www.ina.hn/userfiles/file/nuevos/ley_para_la_modernizacion_y_desarrollo_del_sector_agricola_lmnda.pdf
- 5 <http://www.cehprodec.org/index.php/publicaciones/category/5-observatorio>
- 6 <https://ofraneh.wordpress.com/2014/09/30/desalojo-de-la-comunidad-de-barra-vieja-el-indura-resort-y-la-estrategia-de-expulsion-de-los-garifunas-de-honduras/>
- 7 <https://landrightsnow.contentfiles.net/media/assets/file/bp-common-ground-land-rights-020316-es.pdf>
- 8 <https://books.google.hn/books?id=J1Hy6pX-8mAC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=karaphuna&source=bl&ots=xu4ZZIK2F3&sig=9K0dzyAJEiyZHOObWgaNXyDZ2pzM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahU>
- 9 [https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_\(m%C3%BAsica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_(m%C3%BAsica))
- 10 <http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/amenazan-con-desalojar-aldea-gar%C3%ADfuna>
- 11 <https://honduprensa.wordpress.com/2015/04/26/camilo-atala-el-hombre-mas-rico-de-america-central-segun-bloomberg/>
- 12 <http://criterio.hn/banco-ficohsa-emite-comunicado-amenazante-para-provocar-miedo-en-la-prensa/>
- 13 <https://ofraneh.wordpress.com/2016/09/14/indura-hilton-pierde-caso-en-contra-de-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja/>
- 14 Ramón D. Rivas, «Pueblos Indígenas y Garífuna de Honduras», 1993.
- 15 <http://elpulso.hn/masacre-de-el-tumbador-una-prision-verde-de-impunidad/>
- 16 <http://www.nytimes.com/2011/09/16/world/americas/honduras-land-conflicts-highlight-polarization.html?>
- 17 <https://ofraneh.wordpress.com/2013/08/13/una-vez-mas-a-la-defensa-del-territorio-ancestral-garifuna-en-vallecito/>
- 18 http://www.garinet.com/cgi-bin/gksitecontent_SSI.cgi?ACTION=VIEW_ONE_CONTENT&ITEM=10&CATEGORY=57&CONTENT_ID=279&COLOR1=CCCC99&COLOR2=FFFFCC
- 19 <https://ofraneh.wordpress.com/2016/09/14/indura-hilton-pierde-caso-en-contra-de-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja/>
- 20 <http://www.laprensa.hn/economia/dineroynegocios/994973-410/honduras-lidera-armamentismo-en-centroam%C3%A9rica>
- 21 <http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-honduras/cachiros-perfil>
- 22 <http://www.laprensa.hn/economia/dineroynegocios/994973-410/honduras-lidera-armamentismo-en-centroam%C3%A9rica>
- 23 <https://www.youtube.com/watch?v=Sph36Dlx5dU>
- 24 http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf
- 25 <https://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160311/1057531435/honduras-pais-peligroso-para-ambientalistas.html>
- 26 <https://honduprensa.wordpress.com/tag/vallecito/>
- 27 <http://pueblosoriginarios.com/meso/maya/garifuna/dugu.html>
- 28 <http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-lengua-la-danza-y-la-musica-de-los-garifunas-00001>
- 29 <http://nacerenhonduras.com/2009/05/historia-de-las-companias-bananeras-en.html>



Para los garífunas, perder el territorio ancestral diluiría su cultura y la reduciría a ser solamente un grupo afrodescendiente. Las políticas de explotación y extracción, así como las prácticas ilegales, amenazan a un pueblo con una visión particular sobre la propiedad, quienes practican tradiciones que reflejan su filosofía comunitaria, como es no cercar sus predios.

